

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

Lima, cinco de diciembre
de dos mil dieciocho

I.- VISTA la causa en **discordia**; con el acompañado, con los señores Jueces Supremos: Martínez Maraví, Rueda Fernández, Wong Abad, Toledo Toribio, Cartolin Pastor, y Bustamante Zegarra; **adhiriéndose** la señora Jueza Suprema Martínez Maraví al voto de los señores Jueces Supremos Rueda Fernández, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra, obrante de fojas setenta y cinco a ochenta y siete del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema; se emite la presente resolución:

I.1. Consulta

Es materia de consulta ante esta Sala Suprema, la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta del expediente principal, emitida por la **Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este**, consultada por haber realizado control difuso inaplicando el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal; en el proceso penal seguido contra Brayan Ávila Alvarado, como autor del delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado en grado de consumado, en agravio de Gladys Chiquillan Quispe, imponiéndole la citada Sala al imputado cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.

I.2. Fundamentos de la resolución elevada en consulta

El Colegiado de la Sala Superior sustenta la inaplicación de la norma penal, refiriendo que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, es incompatible con el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política, **aplicando al imputado Brayan Ávila Alvarado la pena por responsabilidad restringida regulada en el citado artículo 22**, imponiendo la condena de cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Delimitación del objeto de pronunciamiento

Absolviendo la consulta, en primer término se procederá a precisar las reglas para el ejercicio del control difuso, en segundo orden se verificará si la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal supera el examen de constitucionalidad, para finalmente resolver sobre la aprobación o no de la sentencia elevada a esta Sala Suprema atendiendo a las particularidades del caso concreto.

SEGUNDO: Sobre el control difuso

2.1. Es importante reiterar lo señalado por esta Sala Suprema en sentencia de doctrina jurisprudencial vinculante¹, que en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, **prevalece la norma constitucional cuya supremacía y jerarquía², debe ser preservada por todos los jueces al momento de resolver los casos de su competencia, estando habilitados por mandato constitucional para tales fines, ejercer la revisión judicial de las leyes**, esto es, el control difuso, conforme al segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, y artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

2.2. Asimismo, **las normas legales gozan de presunción de constitucionalidad y son obligatorias para todos sin excepción**, como lo ordena nuestra Constitución en el artículo 109, y reconoce el derecho fundamental de igualdad ante la ley, correspondiendo a los jueces cautelar la seguridad jurídica; en ese contexto, el control difuso resulta muy gravoso al afectar la obligatoriedad de las leyes, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, al permitir que las normas del ordenamiento jurídico que son obligatorias y vinculantes para todos sin excepciones, sean inaplicadas en algunos casos particulares a diferencia de la generalidad de aquellos casos que se encuentran en el mismo supuesto normativo, en razón de las circunstancias específicas del caso en que se acredita que la aplicación de la norma vulnera derechos fundamentales, **quien enjuicie una norma debe probarlo**; por lo que, el

¹ Consulta N°1618-2016 / Lima Norte, fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis.

² Reconocida en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

ejercicio del control difuso debe ser realizado conforme parámetros de compatibilidad constitucional y solo para los fines constitucionales.

2.2.1. En ese contexto, el control difuso conlleva una labor compleja que ineludiblemente debe ser observada por los jueces y traducida en la motivación de la decisión judicial, en tanto garantiza que están actuando conforme a los fines de preservar la supremacía de la norma constitucional, que no se esta vulnerando la presunción de legitimidad y constitucionalidad de las leyes, tampoco se esta actuando en contra del ordenamiento jurídico, ni utilizando el control difuso para fines distintos a los permitidos.

2.2.2. La motivación no puede ser en abstracto ni genérica pues no se trata de un control concentrado sino concreto, por lo que es ineludible y forzoso que los jueces motiven el control difuso en relación a particularidades del caso concreto; en ese orden el análisis, la identificación de los derechos involucrados, la intervención y su intensidad, la aplicación del test de ponderación, están inescindible y obligatoriamente vinculados a los datos y particularidades del caso, **sustentados en razones, datos y circunstancias fácticas del procesado que conlleven en su situación específica a determinar que la norma legal concretiza la vulneración a algún derecho fundamental;** reiterando, que no esta permitido un control en abstracto de las leyes, el cual compete al Tribunal Constitucional en acción de inconstitucionalidad decidiendo con efecto *erga omnes*, tribunal que ha señalado en relación al control difuso, que **está vedado cuestionar hipotética o abstractamente la validez constitucional de las leyes**³.

2.3. Es así, cuando el Juez advierta que alguna norma aplicable al caso concreto, no admite interpretación conforme a la Constitución, debe proceder a realizar el control difuso en forma diligente y con motivación **cualificada**, en tanto es un proceso gravoso y complejo, habiendo establecido la doctrina jurisprudencial antes señalada, las siguientes reglas en compatibilidad con el ordenamiento constitucional y que facilitan la labor del Juez:

³ "El juicio de relevancia que subyace al ejercicio válido del control de constitucionalidad no solo tiene el propósito de recordar el carácter jurídico del control de constitucionalidad de las leyes, sino también **se establece como límite a su ejercicio, puesto que, como antes se ha recordado, está vedado cuestionar hipotética o abstractamente la validez constitucional de las leyes**". Sentencia del Tribunal Constitucional N°02132-2008-AA, fundamento 19 (el subrayado es nu estro).

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

a) Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales; b) Realizar un juicio de relevancia de la norma; c) Agotar la interpretación de la norma conforme a la Constitución; d) En caso de no encontrar una interpretación constitucional de la norma, proceder al control difuso identificando los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia⁴.

TERCERO: Sobre la presunción de constitucionalidad de la norma inaplicada

3.1. La sentencia consultada impone cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva (pena reducida), **inaplicando la norma del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal** que excluye de la reducción de la pena legal a los agentes del ilícito de robo agravado.

3.2. Por lo que, se **inicia con la regla de presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de la norma legal inaplicada**, norma que integra el cuerpo normativo del Código Penal, y promulgado conforme a la Constitución superando

⁴ Las reglas del control difuso precisadas en la doctrina jurisprudencial Consulta N° 1618-2016 / Lima Norte, son las siguientes:

i. Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales, las que son de observancia obligatoria conforme lo prevé el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, gozan de legitimidad en tanto hayan sido promulgadas conforme al procedimiento previsto en nuestra Carta Magna; debiendo suponer a priori que la norma no viene viciada de ilegitimidad, en ese orden, quien enjuicie la norma esgrimiendo infracción a la jerarquía de la norma constitucional, debe cumplir con la exigencia de demostrar objetivamente la inconstitucionalidad alegada.

ii. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una norma cuando es la vinculada al caso, debiendo los jueces ineludiblemente verificar si la norma cuestionada es la aplicable permitiendo la subsunción de las premisas de hecho en los supuestos normativos, constituyendo la regla relevante y determinante que aporta la solución prevista por el ordenamiento jurídico para resolver el caso concreto; en tanto la inaplicación permitida es sólo respecto de la norma del caso en un proceso particular.

iii. Identificada la norma del caso, el juez debe efectuar una **labor interpretativa exhaustiva**, distinguiendo entre disposición y norma, siendo el primero el texto o enunciado legal sin interpretar, y la norma es el resultado de la interpretación, por lo que siendo el control difuso la última ratio, que se ejerce cuando la disposición no admite interpretación compatible con la Constitución Política del Perú, es obligación de los jueces haber agotado los recursos y técnicas interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma legal; por el contrario el uso indiscriminado acarrea inseguridad jurídica en relación a la aplicación de las normas, vulnerando el orden del sistema normativo.

iv. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la inaplicación al caso particular, por lo que **es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención**, para así poder **aplicar el test de proporcionalidad** u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la medida legal en cuestión, supera el examen de idoneidad (de medio a fin), el examen de necesidad (de medio a medio), y el examen de proporcionalidad en sentido estricto (cuanto mayor la intensidad de la intervención o afectación del derecho fundamental, debe ser mayor el grado de satisfacción u optimización del fin constitucional).

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

el control de producción normativa⁵; por ende, es una norma legal válida y vigente que además goza de obligatoriedad conforme a la norma constitucional del artículo 109 de la Constitución Política.

3.3. Continuando con el examen de vinculación de la norma con el caso concreto, se tiene que en el texto vigente al momento de los hechos, del artículo 22 del Código Penal contiene varias normas sobre imputabilidad restringida, de las cuales una se relaciona con el caso concreto, *la que excluye a los agentes mayores de dieciocho y menores de veintiún años, de la reducción de la pena cuando hubieren cometido el delito de robo agravado; norma que se vincula en forma directa e indisoluble con la determinación de la pena para el procesado Brayan Ávila Alvarado*, que en sentencia ha sido encontrado responsable como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, cometido cuando tenían veinte años de edad, y que de acuerdo a la norma citada el acusado se encuentra excluido de la posibilidad de reducción de la pena mínima señalada en la ley; **superando la norma el juicio de relevancia.**

3.4. Procediendo a la interpretación en compatibilidad con la Constitución, se observa que la disposición legal contiene varias normas referidas a la imputabilidad restringida:

3.4.1. Una regla general en el primer párrafo: “**Podrá** reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción”; cabe anotar que, **la norma no contiene mandato de reducción de la pena mínima legal en forma obligatoria e irrestricta para todos los agentes con imputabilidad restringida**, contemplando la *posibilidad* de reducción prudencial, lo cual exige del Juez evaluación y determinación motivada de la decisión en cada caso, **significando que aún cuando se trate de agentes con imputabilidad restringida e indistintamente del tipo de ilícito cometido, no siempre conllevará una reducción de la pena mínima legal.**

3.4.2. El primer párrafo de la norma establece restricciones para algunos casos de reincidencia, y el segundo párrafo (enjuiciado), precisa exclusiones a la

⁵ Promulgado por Decreto Legislativo N° 635, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno; superando el control de producción normativa conforme al procedimiento constitucional del artículo 108 de nuestra Carta Magna.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

reducción de la pena, entre otros, para los agentes que hayan incurrido en delito de robo agravado.

3.4.3. La disposición legal materia de interpretación, se vincula con los principios generales del Código Penal, que en su artículo II del Título Preliminar prevé que ***nadie será sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en la ley*** vigente al momento de la comisión⁶; **reafirmando como principio la vinculación a la pena legal** prevista en el ordenamiento jurídico y producida conforme al procedimiento constitucional, contenida en el Código Penal para cada hecho punible. Asimismo, se vincula con la norma del artículo V del citado Título Preliminar, la cual establece que **solo el Juez competente puede imponer las penas y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley**; acogiendo el principio de legalidad en la pena y en la graduación⁷. No obstante, las normas del artículo 22 del Código Penal establecen excepciones a dicho principio y un tratamiento diferenciado **posibilitando la reducción de la pena legal a algunos supuestos de imputabilidad restringida**; extrayendo que **la vinculación a la pena legal es la regla general y principio del Código Penal, y que el tratamiento diferenciado en la ley lo ocasiona el artículo 22 del citado Código** al crear una posibilidad para algunos agentes con imputabilidad restringida, supuesto normativo que se vincula y sustenta en los fines de la pena.

Reiteramos, **que la norma que prevé la reducción de la pena, en sí no es una norma universal e igualitaria para todos los supuestos de imputabilidad restringida**, sino que desde ya contiene distinciones al establecer como "posibilidad", significando que a todos los agentes con imputabilidad restringida no se les reducirá la pena, incluso aquellos que no estén en el supuesto del segundo párrafo, lo cual dependerá de las particularidades del agente y del caso evaluadas y motivadas en la decisión del Juez.

3.4.4. Confirmando que **la norma en cuestión, sí contiene un tratamiento desigual: a)** desde la consideración de imputabilidad restringida; **b)** del beneficio de reducción de la pena para algunos agentes con imputabilidad restringida, creando una excepción a la vinculación a la pena legal prevista para todos los

⁶ El artículo II del Título Preliminar del Código Penal, respecto al Principio de Legalidad, establece que: "*Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella*".

⁷ El artículo V del Título Preliminar del Código Penal refiere que: "*Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley*".

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

casos; **c)** el tratamiento diferenciado entre agentes con imputabilidad restringida indistintamente del ilícito cometido, en que la reducción es una posibilidad; **d)** la exclusión de los reincidentes, de los integrantes de organización criminal y de los agentes de delitos graves y pluriofensivos, de la posibilidad de reducción de la pena legal, notando que **de la excepción creada a la regla general, el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal distingue que algunos agentes no son comprendidos en la regla de excepción, manteniendo para ellos la vinculación a la pena legal.**

3.4.5. Continuando con la interpretación conforme a la Constitución, se advierte que el cuestionamiento a la norma reside en la exclusión a los agentes del delito de robo agravado (con imputabilidad restringida), de la posibilidad de reducción de la pena, vulnerando supuestamente el derecho a la igualdad.

3.4.6. En principio, el **derecho fundamental a la igualdad** se encuentra reconocido y protegido en los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconociendo que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad, que todos son iguales ante la ley, que tienen derecho a igual protección de la ley, y protección contra todo acto de discriminación⁸; y en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asumiendo los Estados el compromiso de respetar los derechos fundamentales y garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna, al derecho a la igualdad ante la ley con derecho a igual protección de la ley⁹.

Reconocido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en dos dimensiones, una la **igualdad como prohibición de discriminación** (*por el cual es discriminatorio todo trato diferenciado que atente contra la dignidad de la persona humana, sea por condiciones de superioridad o inferioridad, no obstante no toda distinción de trato puede considerarse violatoria por si misma de la*

⁸ El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos refiere que: “*Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros*”. Asimismo, el artículo 7 de la citada declaración sostiene que: “*Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación*”.

⁹ El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “*1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano*”. Además, el artículo 24 de dicha convención regula que: “*Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley*”.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

dignidad humana); la segunda, **igualdad ante la ley** que deriva la concepción de igualdad como prohibición de trato arbitrario (sustenta que la ley se aplica igual a todos los individuos).

La interpretación vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁰, establece que **un trato diferenciado basado en criterios razonables y objetivos, que se sustente en desigualdades reales y objetivas, no constituye discriminación** (OC-4/84 del diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, párrafo cincuenta y seis y cincuenta y siete).

3.4.7. En ese sentido, toda restricción o tratamiento diferente en la ley no conlleva necesariamente una afectación al derecho a la igualdad, en tanto la exigencia es el trato igual entre iguales admitiendo un trato diferente entre desiguales, por lo que el examen se circunscribe a determinar: **si es o no una diferencia no justificada de trato en la reducción de la pena, entre agentes de delitos con imputabilidad restringida, por razón del delito cometido.**

En consecuencia el derecho del agente a la igualdad ante la ley, reconocido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú garantiza el trato igual entre iguales, y desigual entre desiguales, **siendo posible realizar distinciones en base a criterios objetivos y razonables considerando desigualdades de hecho, como instrumento para proteger a quienes deban ser protegidos por circunstancias de mayor o menor fragilidad o desamparo en que se encuentren.**

3.4.8. Exigencias que cumple la norma del artículo 22 del Código Penal al establecer en primer lugar **un tratamiento desigual por razón de la edad del agente** confiriéndole imputabilidad restringida; en segundo lugar estableciendo la **posibilidad del beneficio de la reducción de la pena** solo para aquellos con imputabilidad restringida, con exclusión de la generalidad de agentes, brindando un tratamiento legal diferente y especial, debido a que la pena requerida **puede** ser en algunos casos menor al mínimo legal; y en tercer lugar de aquellos que tienen imputabilidad restringida que sean reincidentes, integrantes de organización criminal, y los que hubieran cometido **delitos graves** y pluriofensivos, los mantienen en el régimen común, constituyendo un trato igualitario con relación a la generalidad de imputados, y uno diferente con

¹⁰ Interpretación vinculante conforme a la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución Política del Perú.

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

relación a otros agentes con imputabilidad restringida que tienen la posibilidad de acceder a la reducción de pena.

En este último supuesto, la norma guarda concordancia con el principio de vinculación a la pena legal previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, con la norma del artículo VII del mismo Código, la cual establece que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor¹¹, con el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo VIII de la citada normativa pues la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; y el trato diferente se justifica con los fines constitucionales de la pena, **reeducación, rehabilitación y reinserción del penado a la sociedad**¹², **en concordancia a la función de la pena contemplada en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, en tanto la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora**¹³, justificando la exclusión de la reducción de la pena mínima legal, para el agente que incurre en delitos graves que lesionan varios bienes protegidos constitucionalmente.

En ese orden de ideas, en el caso del ilícito de **robo agravado**, igual que la generalidad, la pena será dentro de los límites legales, atendiendo que el tiempo requerido para los fines de la pena y reinserción con éxito a la sociedad, se prevé que será mayor conteniendo una exigencia legítima y específica al mantener los límites legales de la pena cuando se incurren en delitos de gravedad y pluriofensivos¹⁴.

3.4.9. Concluyendo, que estamos ante un tratamiento jurídico desigual legítimamente establecido¹⁵, compatible con los fines constitucionales de

¹¹ En relación a la responsabilidad penal, el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal regula que: "La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva".

¹² El fin perseguido de la norma, el cual está vinculado a la finalidad de la pena, que de acuerdo a la norma del numeral 22 del artículo 139 de la Constitución, el fin constitucional de la pena es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

¹³ Respecto a los fines de la pena y medidas de seguridad, el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal sostiene que: "*La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación*".

¹⁴ Conforme señala Robert Alexis, en el caso que no hubiera ninguna razón suficiente para la permisión de tratamiento igual se encuentra ordenado un trato igual, en cambio, si hay razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual (citado por José Víctor García Izaguirre, *El Test de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales*, Editorial Adrus, 2012, p. 433).

¹⁵ Criterios acogidos de la OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párrafo 57: No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

la pena, por lo que la norma en ninguna de sus regulaciones evidencia supuesto de inconstitucionalidad, pues como se tiene señalado, **no todo tratamiento jurídico diferente concluye en un trato discriminatorio, pues en principio no toda distinción de trato es ofensiva a la dignidad humana, sino cuando ella carece de justificación objetiva y razonable**, existiendo desigualdades de hecho que legítimamente se traducen en desigualdades de tratamiento jurídico¹⁶, manteniendo la norma la presunción de constitucionalidad en abstracto.

No obstante, como también lo tiene señalado este Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia¹⁷, el que la norma en abstracto admita interpretación compatible con la Constitución, no excluye que en concreto ante un caso específico la misma norma legal pueda resultar inconstitucional.

En tal supuesto, se debe continuar con las reglas del control difuso, acudir al test de ponderación u otro similar, identificando el o los derechos fundamentales vulnerados al agente, evaluar la intensidad de la intervención según las circunstancias e incidencias del caso, debiendo tener presente que **la graduación y reducción de la pena es ejercida por el Juez Penal conforme a ley, y que cuando ejercita el control difuso actúa como Juez Constitucional atendiendo a la protección de derechos fundamentales, requiriendo que su actuación se ajuste a los fines y parámetros constitucionales.**

¹⁶ Conforme a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-4/84 de fecha diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, párrafo 56; sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose "en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos" definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva y razonable" [Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, p. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

¹⁷ Consulta N° 286-2013-Arequipa, Consulta N° 555-2013-Arequipa, Consulta N° 10807-2013-Arequipa, Consulta N° 3221-2013, Consulta N° 7598-2016-Cañete, Consulta N° 14634-2013, Consulta N° 02822-2013, Consulta N° 02050-2015, Consulta N° 9548-2012, Consulta N° 08075-2014, Consulta N° 10277-2014, Consulta N° 05699-2015, Consulta N° 04980-2015, Consulta N° 10807-2013, Consulta N° 12895-2013, Consulta N° 12102-2013, Consulta N° 00833-2015, Consulta N° 027 47-2015, Consulta N° 00600-2015, Consulta N° 1549-2015.

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

CUARTO: Control de Constitucionalidad en el caso concreto

4.1. En el asunto materia de análisis, el acusado fue sentenciado por delito de robo agravado, señalando la sentencia penal como circunstancias vinculadas del delito que: *“el día veintidós de agosto del año dos mil quince, a horas 21:00 p.m. aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Gladys Chiquillan Quispe se encontraba transitando por el pasaje estrella del distrito de Ate Vitarte, a la espalda del nuevo Hospital en construcción de Vitarte, habría advertido la presencia de un sujeto que venía en sentido contrario, siendo el caso que al cruzarse con el mismo, quien posteriormente fue identificado como el ahora acusado Brayan Avila Alvarado, este se abalanzó violentamente colocándola contra la pared para de inmediato tras tenerla fuertemente sujeta, amenazarla con un cuchillo, el cual se lo habría puesto a la altura del cuello y utilizando palabras soeces, del mismo modo el procesado procedió a rebuscarle la cartera, logrando sustraer del interior del mismo un celular marca Mobile y su billetera que contenía la suma de ciento diecinueve soles, así como documentos personales para finalmente retirarse del lugar de los hechos, posteriormente la agraviada conjuntamente con la Policía Nacional del Perú emprendieron la búsqueda del acusado, quien al cabo de quince minutos aproximadamente fue ubicado cerca del lugar de los hechos conjuntamente con dos personas de sexo masculino, es así que al ser reconocido por la agraviada, se procedió a su registro personal, hallándose en el bolsillo derecho de su pantalón un cuchillo de cocina y un celular marca Mobile color negro, sin su respectivo chip, el cual la agraviada reconoció suyo e indicó que el mencionado cuchillo fue utilizado por el hoy acusado para arrebatarse sus pertenencias”*(Sic); el ilícito fue cometido con varios agravantes de la pena, utilizó violencia física y amenazó con un arma blanca contra la agraviada y se aprovechó de la noche para perfeccionar su injusta conducta, siendo condenado el acusado por el ilícito de robo agravado previsto en el artículo 188 y en el primer párrafo del artículo 189 Código Penal, con los agravantes de los numerales 2 y 3.

4.2. El objeto de consulta es la inaplicación de la norma que excluye al sentenciado de la reducción de la pena por imputabilidad restringida; los fundamentos de la sentencia recurrida sobre el asunto, se encuentran medularmente en el numeral 12.3.1 de la misma, que señala la concurrencia de una circunstancia atenuante privilegiada, considerando que el acusado al momento de los hechos tenía veinte años de edad, lo cual evidenciaría su

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

capacidad penal disminuida que incide en el reproche del injusto penal; y, que en los numerales 11.3.1 al 11.3.6 de la resolución consultada se ha efectuado control difuso e inaplicado el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, en relación a ello, se advierte que la Sala de mérito concluye que dicho dispositivo legal no supera el test de juicio de igualdad, por lo que se trata de una medida inconstitucional, que no resulta idónea, necesaria, ni proporcional al fin constitucional perseguido.

Al respecto, es necesario reiterar que si bien es facultad de los Jueces realizar el control difuso, no obstante este control debe ser efectuado para los fines y conforme a parámetros de validez constitucional, pues presumiéndose que la ley es legítima y constitucional en abstracto, el Juez que enjuicie una norma debe acreditar y justificar porque la norma sería inconstitucional, de acuerdo a las particularidades y circunstancias del caso específico de quien esta juzgando, más aún si toda decisión requiere justificación.

4.3. Sin embargo, la sentencia consultada no contiene ningún fundamento para ejercitar el control difuso en el caso particular del sentenciado Brayan Ávila Alvarado; tampoco contiene argumentos para decidir la reducción de la pena por imputabilidad restringida, pues como se tiene señalado la regla general se refiere a una "*posibilidad*" de reducir, y no una reducción automática, lo cual demanda una motivación cualificada, exponer las razones y consideraciones del caso concreto, que lleven a reducir con afectación del principio de vinculación a la pena legal.

4.4. Por el contrario, la resolución consultada contiene argumentos en forma genérica que van orientados al control abstracto de la norma legal, lo cual no se encuentra en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado y del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que autoriza la revisión judicial de las leyes para el caso concreto, que es objeto de decisión en el proceso judicial que el Juez está resolviendo; pues la inaplicación de normas a casos particulares sin cumplir los supuestos para el control difuso, constituye vulneración al principio de igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica, y atenta contra los fines del control difuso; por lo que, se desaprueba la sentencia materia de consulta.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

III.- DECISIÓN:

Por estas consideraciones, **DESAPROBARON** la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta del expediente principal, emitida por la **Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este**, consultada por haber realizado control difuso inaplicando el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal; en consecuencia, **NULA** la citada resolución debiendo la acotada Sala Superior emitir nuevo pronunciamiento; en el proceso penal seguido contra Brayan Ávila Alvarado, como autor del delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado en grado de consumado, en agravio de Gladys Chiquillan Quispe; y, se devuelva. **Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Rueda Fernández.**

S.S.

MARTÍNEZ MARAVÍ

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

BUSTAMANTE ZEGARRA

Ciz/lle

**EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS WONG ABAD Y
CARTOLIN PASTOR, ES COMO SIGUE: -----**

PRIMERO.- Es materia de consulta la sentencia emitida por la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta, mediante la cual, ejerciendo control difuso, se declaró inaplicable al caso concreto el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, con respecto

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

al acusado Brayan Ávila Alvarado en lo referido al delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, por colisionar con el derecho constitucional a la igualdad reconocido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado y Normas Internacionales de Protección de Derechos Humanos (artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

SEGUNDO.- Ahora bien, la consulta debe ser entendida como una institución procesal de orden público que viene impuesta por la ley, que no es en esencia un recurso sino un mecanismo a través del cual se impone al órgano jurisdiccional el deber de elevar el expediente al superior y a este el de efectuar el control de la constitucionalidad de la resolución dictada en la instancia inferior.

TERCERO.- Así, tratándose de una consulta por incompatibilidad entre una disposición constitucional y otra norma de inferior jerarquía, el artículo 14¹⁸ del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha establecido que en esos casos, los jueces (de cualquier proceso o especialidad) resuelven la causa con arreglo a la primera; previéndose que respecto de las resoluciones en las que se haya efectuado este control constitucional, deben ser elevadas en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema si no fueran impugnadas.

CUARTO.- En este contexto, a través de la sentencia de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta, que es materia de consulta, la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, condenó a Brayan Ávila Alvarado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (previsto en los incisos 2 y 3 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, concordado con el artículo 188 del mismo cuerpo de leyes), en agravio de Gladys Chiquillan

¹⁸ Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- De conformidad con el Artículo 138 de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.

En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.

Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular.

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

Quispe; condenándolo por tal motivo a cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva; fijando a su vez una reparación civil de S/. 1,500.00 a favor de la agraviada.

Asimismo, declaró inaplicable al caso concreto la parte pertinente del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal (en su tenor modificado por la Ley N° 30076), sosteniendo que dicha norma es inconstitucional por cuanto colisiona con el derecho a la igualdad contenido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado y normas internacionales de protección de derechos humanos (artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

QUINTO.- En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, corresponde a esta Sala Suprema pronunciarse sobre el control de la constitucionalidad realizado por la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, la cual, como venimos diciendo, inaplicó al caso concreto lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.

SEXTO.- Bajo ese orden de ideas, para un mejor análisis del tema que es materia de la consulta, es preciso tener en cuenta el marco legislativo que resulta aplicable en torno a la responsabilidad restringida de las personas comprendidas entre los dieciocho y veintiún años de edad.

Así, debemos mencionar que el artículo 22 de Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo N° 635, dispuso en su texto original que cuando el agente tuviera más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años de edad, al momento de realizar la infracción, se podía reducir prudencialmente la pena señalada en la ley para el hecho cometido; sin embargo, este artículo fue modificado por el artículo único de la Ley N° 27024, publicada el veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; por el artículo 1 de la Ley N° 29439, publicada el diecinueve de noviembre de dos mil nueve; y, posteriormente, por el artículo 1 de la Ley N° 30076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece (el cual fue inaplicado por la sentencia consultada), cuyo segundo párrafo estableció que queda excluido de la responsabilidad restringida por la edad, el agente que haya incurrido, entre otros, en delito de robo agravado.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

SÉPTIMO.- Establecido lo anterior, corresponde desarrollar el sustento y características del principio de igualdad. Debiendo señalarse que este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, de acuerdo con el cual: *“(...) toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”*.

Ahora bien, contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, nos encontramos frente a un derecho fundamental que no otorga la facultad general para exigir un trato igual a las demás personas, sino para ser tratado de igual modo que quienes se encuentran en una situación similar.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia dictada en el Expediente N° 03525-2011-AA/TC, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas establece que una norma debe ser aplicada por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de hecho de la misma; mientras que la segunda, implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable¹⁹.

Debe precisarse, entonces, que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; pues solo se estará frente a una diferenciación constitucionalmente prohibida cuando el trato desigual no se funde en causas objetivas y razonables.

Por consiguiente, debe examinarse si la diferenciación realizada por el legislador respeta los límites establecidos.

OCTAVO.- A partir de lo expuesto, el ponente considera que el modificado artículo 22 del Código Penal debe considerarse inconstitucional, puesto que si bien dicha norma, en principio, podría encontrarse justificada atendiendo a la gravedad de los delitos expresamente excluidos de la atenuación de la pena; no obstante, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad restringida constituye el

¹⁹ Véase Fundamento 4.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

producto de la evaluación respecto a la madurez emocional y psicológica de los sujetos activos que se encuentran entre los dieciocho y veintiún años de edad, examen para el cual no resulta relevante la gravedad del delito involucrado.

En efecto, la responsabilidad restringida se fundamenta en la constatación por el Juez de un estado de inmadurez en el agente que provoca una falta de comprensión de la gravedad del delito o de las consecuencias del mismo; lo que puede provocar que la pena conminada legalmente resulte excesiva para cumplir los fines que constitucionalmente se le reconocen.

Sobre el particular, la doctrina señala que:

“(...) el individuo no alcanza la madurez de repente. Se trata de un proceso paulatino, que varía de un individuo a otro. Debido a esta situación, las legislaciones contienen normas que regulan un período intermedio comprendido entre el límite cronológico a partir del cual se considera plenamente adulta (madura) a una persona.

Según el artículo 148 del CP de 1924, este período comprendía a los individuos mayores de 18 años y menores de 21. Los mismos límites figuran en el art. 22 del actual Código. A estos individuos ya se les aplican las normas y sanciones del derecho penal común. Pero, por su situación personal, son considerados como incapaces relativos o imputables restringidos. Es decir, no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente. (...).

Es cierto que, hoy en día, la mayoría de los delitos son obra de personas que se encuentran en este período de desarrollo. Pero también es cierto que el proceso de madurez del individuo aún no ha terminado. (...)”²⁰.

Por consiguiente, si el elemento relevante es el estado de inmadurez del agente, no se encuentra justificación para que la utilización de esta atenuante dependa del delito cometido pues, en este último caso, dos personas en la misma situación de madurez serían tratadas en forma distinta: una con la imposición de una pena ajustada a su situación personal específica y la otra castigada con una pena excesiva.

Por estas razones, no se advierten causas objetivas y razonables que den lugar a la diferenciación prevista en la norma bajo análisis, por el contrario, nos

²⁰ HURTADO, José /PRADO, Víctor: Manual de Derecho Penal. Parte General, I, Lima, 2011, pp. 618-619.

**CONSULTA
EXP. N° 19483 – 2017
LIMA ESTE**

encontramos ante situaciones idénticas –madurez en razón de la edad- que merecen un trato igualitario.

NOVENO.- Sobre el particular, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la República, con ocasión del “X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias”, ha emitido el **Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116**, publicado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que ha establecido como doctrina legal, entre otros, los siguientes criterios²¹:

“14. (...)”

*Luego, si la edad del agente está referida a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla general en función de criterios alejados de este elemento, como sería uno centrado en la gravedad de ciertos delitos. La gravedad del hecho es un factor que incide en la entidad, importancia, relevancia social y forma de ataque al bien jurídico vulnerado, mientras que **la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del hecho cometido**, que tiene su propio baremo de apreciación.*

*15. El grado de madurez o de disminución de las actividades vitales de una persona en razón a su edad no está en función directa a la entidad del delito cometido. **La disminución de la pena, según el presupuesto de hecho del artículo 22 del Código Penal, no tiene su fundamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser humano.***

Por ende, este factor de diferenciación no está constitucionalmente justificado. (...).” (Resaltado nuestro)

DÉCIMO.- Al respecto, el propio Tribunal Constitucional señaló en la sentencia dictada en el Expediente N° 00751-2010/PHC/TC, de fecha quince de junio de dos mil diez, que:

“De acuerdo al texto del primer párrafo del artículo 22 del Código Penal (responsabilidad restringida por la edad) y a lo señalado en el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 (fojas diecisiete), queda a criterio del juez la reducción prudencial de la pena y/o inaplicación del segundo párrafo del artículo antes mencionado”.

²¹ De acuerdo a lo señalado en el Considerando 25°.

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

Siendo que el referido Acuerdo Plenario, en el numeral décimo primero, con carácter de doctrina legal, estableció que:

“Los jueces penales, en consecuencia, están plenamente habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22 del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación – desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente - que impide un resultado jurídico legítimo”.

Por consiguiente, entendemos que nuestro Tribunal Constitucional ha aprobado, implícitamente, el criterio antes citado.

DÉCIMO PRIMERO.- Pues bien, regresando al caso de autos, apreciamos que conforme lo ha detallado la sentencia elevada en consulta, el sentenciado presentaba las siguientes características personales que fueron valoradas por la Sala juzgadora: al momento de la comisión del delito tenía veinte años; carecía de antecedentes penales; aceptó los cargos imputados; tenía carencias sociales al provenir de un sector socio económico considerado deprimido; antes de incurrir en el delito laboraba como ayudante percibiendo un ingreso semanal de doscientos nuevos soles aproximadamente; no culminó sus estudios secundarios (primer año de educación secundaria).

En consecuencia, el medio social en el que se desarrolló, aunado a su grado inmadurez, determinan que el sentenciado presente condiciones personales particulares que deben ser consideradas al momento de imponer la pena. En ese sentido, debe ser tratado de igual modo –con responsabilidad restringida- que las demás personas del mismo grupo etáreo que cometan los otros delitos no excluidos por el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.

Estando a ello, el ponente considera que la imposición de cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva al imputado, con la inaplicación del acotado segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, como ha efectuado la sentencia elevada en consulta, resulta razonable y proporcional a la situación personal del agente.

DÉCIMO SEGUNDO.- Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anotado, debe ponderarse que la imposición de la pena sin el beneficio de la responsabilidad restringida, implicaría un exceso y desproporción que atentaría contra los

**CONSULTA
EXP. N°19483 – 2017
LIMA ESTE**

derechos de rehabilitación y reinserción social –los cuales, de acuerdo con el artículo 5 numeral 5.6²² de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyen la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad-; así como contra la realización personal y familiar, el proyecto de vida y otros derechos vinculados a la dignidad de la persona que se encuentran previstos en el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. *Máxime*, si en el caso de autos estamos frente a una persona joven que, eventualmente, puede reinsertarse a la sociedad y reconducirse con mayor madurez.

DÉCIMO TERCERO.- Por lo precedentemente expuesto, se concluye que la inaplicación de la prohibición contemplada en el artículo 22 segundo párrafo del Código Penal, efectuada por la sentencia objeto de consulta en mérito al control difuso que le otorga a la Constitución y la Ley, se encuentra arreglada al artículo 138 de la Carta Magna, por lo que corresponde su aprobación.

Por tales fundamentos, **NUESTRO VOTO** es porque **SE APRUEBE** la sentencia consultada de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta, que resuelve **INAPLICAR** al presente caso lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal; en el proceso penal seguido contra Brayan Ávila Alvarado, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado; en agravio de Gladys Chiquillan Quispe; y, se devuelva.

S.S.

WONG ABAD

CARTOLIN PASTOR

Rllc/myp

²² Artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a la Integridad Personal:
(...) 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.